



Compás de espera para pensar en las elecciones de marzo

Josep M. Sanmartí *

PARA conmemorar el 17 aniversario del referendo popular de la Constitución de 1978, el pasado 6 de diciembre se reunieron en el Congreso de los Diputados los representantes de las instituciones del Estado y del mundo político, económico, sindical, social y cultural en un ambiente distendido e incluso cordial, a pesar de que el presidente del Gobierno, Felipe González, y el del PP, José María Aznar, no se saludaron, siguiendo una tan fea como inveterada costumbre de los dos. Este clima mucho más relajado que el vivido por el país en los dos últimos años, arranca de las elecciones autonómicas en Cataluña el 19 de noviembre y del rechazo tres días más tarde de una moción parlamentaria de Coalición Canaria para que Felipe González disolviera de inmediato las Cortes Generales y convocara elecciones anticipadas para los primeros días de 1996.

* Periodista. Madrid.

Con todo ello quedó claro que CiU no renovária su anterior apoyo al gobierno central, que no había forma de hacer caer al ejecutivo por la vía parlamentaria y que, en consecuencia, había que admitir de grado o por fuerza el calendario fijado por Felipe González de celebrar las elecciones legislativas en marzo de 1996. Aun admitiendo que puede ocurrir, no parece muy serio especular con un retraso, puesto que tras la devolución del proyecto de Presupuestos del Estado para 1996, es evidente que si el Congreso abre sus puertas en el mes de febrero para un nuevo período de sesiones, será para dejar sistemáticamente en minoría al gobierno y hacerle la vida imposible, sin excluir del todo una moción de censura condicionada a unas elecciones. Algunos hablan de acontecimientos excepcionales, como por ejemplo una oferta de tregua por parte de ETA, para que Felipe González se agarrara a un clavo ardiendo y pospusiera la anunciada consulta. En todo caso, se trata de especulaciones sin mucho sentido: si no hay más elementos, lo razonable es pensar que en marzo habrá elecciones, y de hecho el gobierno y todos los partidos políticos ya han ajustado sus estrategias a este calendario.

Coincide ello con un claro giro del PP hacia una actuación pública mucho más moderada y hacia un mayor esfuerzo por concretar y explicar su programa, especialmente el económico. Este nuevo talante se ha traducido en hechos positivos como la sensata disolución de la Comisión de investigación de los GAL en el Senado, o la celebración de una reunión entre Felipe González y José María Aznar el 13 de diciembre por lo menos para aunar criterios en vísperas del trascendente Consejo Europeo de Madrid. Tres meses antes cualquiera de estos hechos hubiera sido por desgracia impensable.

La legislatura más tensa y complicada desde las constituyentes

COMO suele decirse se trata sin duda de la calma que precede a la tempestad, pero por lo menos permite un respiro a la ciudadanía que por fin puede palpar un ambiente de normalidad, sólo roto por los desalmados crímenes de ETA y sus adláteres. Además, y no es lo menos importante, en estas semanas de actividad parlamentaria hasta el 31 de diciembre se podrá hacer «limpieza» no total de

los cajones de la legislatura, a la espera de que después de Reyes el presidente González presente al Rey el decreto de disolución de las dos Cámaras. A este cuadro de partida sólo le falta un dato elemental en el momento de redactar estas líneas, que es la decisión final de Felipe González de optar o no por séptima vez a la presidencia del gobierno como cabeza de lista del PSOE.

Detrás queda la legislatura quizá más complicada y tensa de todas desde las Cortes constituyentes. Su característica principal ha sido indiscutiblemente la sucesión de escándalos, hasta el punto de que muchos españoles ya identifican la vida pública de estos años únicamente como la gran época de la corrupción socialista, por más que el PP también ha resultado levemente salpicado.

En realidad, muchos de estos asuntos turbios con nombres propios (Roldán, Rubio, Conde, De la Rosa, Urralburu, etc.) significan el cierre doloroso de los felices años del «reaganismo» español. Muy al contrario de como han querido mostrarlo algunos, como IU, no fue un fenómeno acaecido sólo en España, sino que tuvo una implantación universal y tuvo unas secuelas lamentables desde Nueva York hasta Singapur. Sólo que aquellas alegrías especulativas encontraron aquí una democracia todavía poco estructurada, una economía que se abría casi de golpe al exterior y que estaba ansiosa de éxitos rápidos y contundentes, y con un gobierno socialista que, necesitado de triunfos económicos para acreditar-se frente a los potentes sectores financieros antes que frente a los industriales, alentó, o por lo menos consintió benévolamente, la llamada «cultura del pelotazo», en la que por cierto participaron muchos de sus críticos actuales en un nuevo alarde de la tradicional hipocresía de la vida política y social de nuestro país.

Aunque anteriormente ha había habido escándalos del calado del «caso Filesa», la corrupción que imperó en esta nebulosa frontera entre las finanzas y la política a lo largo de la segunda mitad de los años ochenta se fue descubriendo a partir de 1993. A ellos se les unieron dos asuntos de indiscutible gravedad y de grandes repercusiones políticas a caballo entre la corrupción y el desgobierno: la sustracción y publicación de material secreto del Cesid y las investigaciones sobre la participación de altos cargos del gobierno, especialmente del Ministerio del Interior, en la organización y financiación de los GAL, o sea en la guerra sucia contra ETA, entre 1983 y 1987.

Y el gobierno perdió la iniciativa política

CON ser muy importantes, estos escándalos no deberían haber arruinado la legislatura del modo que lo han hecho. Cualquier democracia debe saber digerir sus asuntos turbios sin merma de su desarrollo normal y disponer para ello de mecanismos de todo orden para neutralizar y castigar con rapidez y rotundidad las conductas delictivas. Y es indiscutible que la joven democracia española ha demostrado tener estos mecanismos, ya que todos estos sucesos han sido convenientemente derivados hacia los tribunales competentes y debatidos a fondo en el Parlamento. Al contrario de lo sucedido en legislaturas anteriores, en ésta se han visto dimisiones políticas tan sonadas como la del vicepresidente Narcís Serra, la de los ministros José Luis Corcuera o Julián García Vargas, la del poderoso director general del Cesid, teniente general Emilio Alonso Manglano, la del portavoz del grupo parlamentario socialista, Carlos Solchaga, la del presidente balear Gabriel Cañellas, etc.

El problema de fondo de la legislatura ha sido más bien la progresiva paralización del juego político normal. Las instituciones han salido relativamente bien paradas de la larga trifulca, pero no así la vida pública. Siguiendo la estela que marcaban un puñado de aventureros de la política, como Mario Conde, José María Ruiz-Mateos, Javier de la Rosa, Ricardo García Damborenea, etc., y y con la activa y entusiasta colaboración de los medios de comunicación, la oposición consiguió antes del verano de 1995 bloquear la iniciativa gubernamental y reducir el espacio político a una cadena de discusiones y denuncias alrededor de la corrupción. Finalmente la combinación de ambos factores logró romper el bloque gubernamental formado por el PSOE y CiU, ruptura que se visualizó claramente en el mes de octubre con el drástico rechazo del proyecto de Presupuesto del Estado para 1996. Todo el mundo coincidió entonces que la legislatura se había convertido en una simple inercia.

Y, sin embargo, esta legislatura ha resultado razonablemente estable y productiva. No habido graves crisis de gobierno, el PSOE ha sido un partido internamente bastante pacificado, ni ha habido una agitación social significativa, con la excepción de sectores muy concretos, como el naval o el pesquero. Se ha hecho un gran esfuerzo para modernizar la legislación, empezando por el Código Penal, el país ha acometido una suave recuperación económica que permite ver con cierto optimismo la convergencia con la UE y la presidencia española de la Unión ha transcu-

ruido sin sobresaltos y con importantes éxitos en su haber, como la Conferencia Euromediterránea de Barcelona. No ha resultado, pues, una legislatura estéril, a pesar de que así se lo ha parecido a la mayor parte de la población, incitada por una prensa abiertamente alarmista.

La victoria del PP aparece como lógica, no como automática

DE cara a las elecciones legislativas del próximo mes de marzo la resaca favorece claramente al PP que juega con la sensación de que es imprescindible un cambio y de que ha llegado la hora, la ocasión y el partido. Desde las generales de 1993 ha ido ganando varias consultas, concretamente las europeas en junio de 1994 y las autonómicas y municipales en mayo de 1995, y ha avanzado en todas las demás, en especial en Andalucía, País Vasco y Cataluña. Su base política y electoral ya es muy firme y, a pesar de sus relevantes limitaciones, nunca como ahora había aparecido como la alternativa posible a un socialismo caduco y enredado en demasiadas historias turbulentas.

No obstante, su «lógica» victoria en marzo que viene, no tiene por qué ser «automática». El tiempo corre a favor del PSOE, que en términos generales conserva un interesante suelo electoral del 30% de los votantes aproximadamente. Una amplia exculpación judicial de Felipe González en relación con los GAL, lo cual le haría aparecer como un mártir de la intransigencia y la maledicencia, el sostenimiento de la mejoría económica con una oportuna bajada de los tipos de interés, lo único que falta para crear un clima de euforia, un final triunfal y triunfalista de la presidencia española de la UE, etc., pueden beneficiar a los socialistas y poner en aprietos a sus rivales populares. Conviene tener en cuenta, además, que el electorado español se ha ido situando dentro de las tendencias que recorren Europa, caracterizadas por la dispersión del voto en distintos partidos y según el tipo de elección, con el fin de provocar mayorías relativas y una compleja política de equilibrios y de pactos, muchas veces distintos en cada institución. Además, es difícil creer que después de la experiencia socialista el cuerpo electoral decida volver a entregar prácticamente todo el poder ejecutivo y legislativo (central, autonómico y municipal) a un solo partido. En resumen, con o sin Felipe González a su frente, el PSOE puede aspirar aún seriamente si no a ganar, por lo menos a limitar la anunciada victoria del PP e intentar un nuevo gobierno de coalición con

los nacionalistas vascos y catalanes o, como mínimo, dejar a Aznar situado en una incómoda mayoría relativa. No se olvide que la política de alianzas sigue siendo uno de los puntos más débiles de los populares.

Especular sobre las posibilidades de gobierno de un PP sin la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados es un ejercicio tan inevitable, como inútil. Ya se verá, aunque ya es significativo que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, se haya guardado todos los triunfos posibles rehuyendo acuerdos con alguna minoría que refuerce la suya mayoritaria con la idea de poder hacer frente a cualquier situación que se produzca en marzo en Madrid, por más que esto le cueste perder esferas de influencia en el Principado. De momento, la oposición ya le ha arrebatado la presidencia del Parlamento autonómico.

¿Quién debe hacer de bisagra?

PERO, llegados a este punto, conviene hacer una reflexión sobre los posibles apoyos parlamentarios del PSOE o del PP en el Congreso y el Senado. No es prudente obligar a los partidos nacionalistas o regionalistas a actuar y trabajar como partidos «bisagra» a escala estatal. Con una base electoral y unos intereses circunscritos a un solo territorio sin duda les resulta difícil movilizarse para atender las demandas concretas de otros territorios. El que puedan participar en la política global del Estado, y en realidad lo han hecho intensamente desde el primer momento, no oculta sus trabas naturales a la hora de implicarse en temas concretos que son ajenos a su electorado real o potencial. Es difícil, por ejemplo, que CiU, sin ningún elector en el País Vasco, Galicia o Andalucía, se preocupe por los problemas pesqueros, o que el PNV se entretenga con las reivindicaciones de los olivareros, o que el PAR se emocione ante los problemas que presentan los accesos a Madrid. Ciertas disputas, como la del agua, demuestran que la vida política en España sigue estando muy territorializada, por no decir que cada vez más.

Es entonces cuando se echa de menos la existencia de un(os) partido(s) centrista(s) de ámbito estatal, aunque, todo hay que decirlo, los partidos nacionalistas se han comportado en este sentido con un notable sentido de la responsabilidad, al margen de si han actuado con acierto o no. En este contexto, la inexplicable desaparición dentro del arco parlamentario de partidos de centro como la UCD o el CDS se revela como una grave insuficiencia de sistema político-parlamentario español. Ellos

deberían facilitar la gobernabilidad del Estado, pudiendo actuar en direcciones distintas sin merma de su personalidad.

Si fuera cierto, cosa que resulta harto dudosa, que el electorado catalán «castigó» a la coalición CiU el 19 de noviembre por su apoyo al gobierno socialista durante dos años, constituiría un hecho de extrema gravedad, dado que disuadiría a las minorías regionales a entrar en futuras experiencias parecidas a la que ha vivido CiU en esta legislatura. La democracia española, como cualquier otra, debe aprender a vivir con las más diversas combinaciones de gobierno para asegurar su estabilidad y funcionalidad. Por ello, la durísima y sin ninguna duda excesiva campaña de deslegitimación que algunos medios de comunicación de Madrid y algunos partidos de la oposición han sometido al acuerdo PSOE-CiU durante los años pasados, puede haber causado un daño irreparable a corto plazo al quemar una solución perfectamente democrática y legítima atendiendo la correlación de fuerzas parlamentarias. Al electorado no se le puede decir que tan malo es un gobierno con mayoría absoluta, como en minoría, como en coalición, porque es cegar todas las salidas sin ofrecer soluciones creíbles al siguiente ejecutivo, sea del signo que sea. Y, dicho sea de paso, la labor deseducativa y demagógica llevada a cabo por algunos líderes políticos y medios de comunicación deslegitimando de una forma sistemática opciones y usos perfectamente democráticos, aunque políticamente combatibles, ha rayado en más de una ocasión en la irresponsabilidad más profunda, creando desde nocivos hábitos mentales en el votante hasta agravios que costará de erradicar.

Las elecciones autonómicas catalanas

COMO la inmensa mayoría de observadores y analistas Jordi Pujol sabía que una parte del electorado de CiU estaba descontento por razones distintas y que en las primeras elecciones que se celebraran en el Principado la coalición pasaría por ciertas dificultades. Su idea era provocar las generales en otoño y encajar entonces el castigo electoral. Al fin y al cabo tener 15 ó 17 diputados en Madrid no iba a cambiar sustancialmente el papel de la minoría catalana, sobre todo si el partido vencedor sacaba mayoría absoluta y gobernaba en solitario. Una vez asumida la expiación, habría ido a las elecciones autonómicas en la primavera de 1996 con mejores garantías para asegurar una repetición de la mayoría absoluta.

Convencido finalmente de que Felipe González no iba a cambiar la fecha de marzo de 1996, Pujol se arriesgó y adelantó unos meses las elecciones autonómicas. Y ciertamente el resultado no fue del todo malo. Muchos gobernantes de dentro y fuera de España firmarían con obtener un triunfo parecido al de CiU después de gobernar 15 años seguidos y de ganar las cinco elecciones autonómicas que se han celebrado desde 1980. A pesar de perder la mayoría absoluta, CiU podrá gobernar cuatro años más con comodidad en cuanto se asegure el apoyo de alguna de las minorías.

A Pujol, maestro consumado en operaciones de imagen, le perdió esta vez una que no controló. Las encuestas le predijeron mejores resultados de los que se dieron a la hora de la verdad. Todavía en los primeros sondeos provisionales del día 19 por la noche le atribuían a CiU mucho más de lo que sacó. Por este motivo, en las filas convergentes se pasó de la satisfacción e incluso la euforia a la decepción, subrayada con evidente satisfacción por sus adversarios directos e indirectos, y ésta fue la imagen que traslució. Para sus líderes y portavoces fue inútil aducir que la coalición nacionalista había ganado bastantes miles de votos más, es decir, que había conservado su masa electoral tradicional, y que más que doblaba en diputados a su inmediato seguidor, el PSC. La sensación de derrota se extendió.

Todo lo contrario sucedió con los socialistas de Joaquim Nadal. Al superar las negras previsiones de las encuestas, pudieron presentar su retroceso de 40 a 34 diputados como un éxito, y no les faltaba cierta razón. Habían aguantado relativamente bien el tirón que dieron las otras minorías y habían roto la aplastante hegemonía convergente, hegemonía que amargó la carrera electoral de Raimon Obiols.

Por lo que se refiere a las otras minorías es lógica y legítima su satisfacción, especialmente la del PP que se convirtió en el tercer grupo parlamentario desplazando a ERC, al experimentar todas ellas algunos avances. Pero lo cierto es que la correlación de fuerzas dentro del mapa parlamentario cambia poco por este lado.

Es harto difícil analizar las motivaciones del electorado catalán en esta ocasión y con unos resultados tan fragmentados. Entre las razones que pudieron haber pesado más cabría señalar dos con todas las cautelas del caso. La primera es que una parte de los votantes ha recuperado su autonomía para votar sin tapujos a la derecha no nacionalista, fenómeno que ya se había producido anteriormente en el País Vasco. Probablemen-

te el PP todavía no ha absorbido votos de CiU, pero el mensaje es evidente: la derecha «españolista» en Cataluña ya dispone de un partido para votar y no le hace falta recurrir vergonzosamente a las listas de CiU. Claro que el aviso es también para los partidos de izquierda, sobre todo para el PSC, que en adelante pueden perder votos de contenido más «españolista» que rojo.

En cualquier caso, desde un punto de vista democrático esta situación puede resultar muy positiva en la medida que cada elector puede votar casi exactamente su preferencia y sentirse convenientemente representado en el Parlamento autonómico. Lo que ocurre es que estas elecciones abren una nueva perspectiva tanto por la pérdida de la mayoría absoluta de CiU, como por los trasvases de votos que se pueden producir de ahora en adelante y por los que se luchará duramente en la campaña electoral de marzo.

En segundo lugar es muy posible que muchos catalanes se sintieran defraudados por los resultados del pacto entre CiU y el PSOE, habida cuenta de que, en contra de lo que se ha dicho hasta la saciedad, no ha producido ningún beneficio directo y exclusivo para esta Comunidad Autónoma. Cuestiones consideradas claves por el presidente Pujol para la autonomía catalana, como la Ley de Costas, la de Comercio (fundamental para las bases electorales de CiU), o la de Telecomunicaciones, o la transferencia de competencias de tráfico a los Mozos de Escuadra, o no se consiguieron, o se consiguieron después de la ruptura. Pujol tuvo que presentarse a las elecciones sin los necesarios triunfos en la manga para justificar convenientemente el apoyo a un gobierno central con la etiqueta de corrupto e ineficaz. Las explicaciones basadas en razonamientos generales de gobernabilidad, estabilidad y recuperación económica, con ser ciertas y razonables, no bastaron para satisfacer a un electorado empujado por los propios convergentes a una carrera autonómica sin fin, y permanentemente insatisfecho y que esta vez se ha encontrado sin una nueva competencia interesante que echar al voto.

El transcurso de la legislatura, las elecciones catalanas y el final de curso que se avecina han dado una lección a más de uno, y hay que pensar que a partir de marzo aparecerá una nueva situación frente a la cual habrá posiblemente reacciones distintas a las habituales hasta ahora. Pero, claro está, los españoles tendrán que dibujar primero esta nueva situación política con el ejercicio libre y democrático de su voto.